

Sheinbaum cierra filas rumbo a 2027 mientras IMSS y agenda laboral enfrentan nuevas pruebas

El Segundo Informe de Claudia Sheinbaum dejó una fotografía clara del momento político del país: Morena busca llegar unido a 2027, la oposición prepara una estrategia para competir en bloque y el gobierno coloca los avances laborales y de salud como parte central de su balance. Sin embargo, detrás de los indicadores positivos aparecen dos desafíos concretos: millones de trabajadores de plataformas todavía no alcanzan seguridad social integral y el IMSS enfrenta cuestionamientos por la calidad de servicios subrogados de hemodiálisis en Guerrero.

La Presidenta utilizó su mensaje para enviar una señal hacia dentro y fuera de su movimiento. Ante gobernadores, legisladores, empresarios e integrantes del Poder Judicial, afirmó que dentro de la Cuarta Transformación no existen divisiones ni rompimientos y reiteró que el proyecto mantiene rumbo.

El mensaje llega justo cuando Morena acelera las decisiones rumbo a las elecciones de 2027. El partido tiene una ventaja organizativa considerable: su padrón pasó de 2.3 millones a 11.6 millones de afiliados en apenas tres años. El crecimiento contrasta con el retroceso del PRI, cuyo padrón cayó a poco más de 819 mil militantes.

Pero una estructura más grande también significa una competencia interna más intensa. Cada gubernatura, alcaldía y candidatura legislativa abrirá negociaciones entre grupos, liderazgos regionales y aliados. Mantener la unidad que Sheinbaum reivindicó será probablemente uno de los principales retos políticos del oficialismo durante los próximos meses.

La oposición ya comenzó a definir su respuesta. Durante la apertura del periodo ordinario del Congreso, dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron al gobierno en materia de seguridad, corrupción y concentración de poder. Alejandro Moreno fue más allá y llamó directamente a construir un frente electoral para derrotar a Morena en los próximos procesos.

Aunque el debate parlamentario fue intenso, también dejó una señal de pragmatismo. Morena, PRI y PAN negociaron previamente para evitar que la entrega del Informe presidencial terminara en una confrontación fuera de control. La

política mexicana sigue teniendo una característica que suele perderse entre los discursos: adversarios en público todavía pueden negociar en privado.

En el ámbito laboral, el gobierno presumió recuperación salarial y nuevos derechos. Uno de los cambios de mayor alcance es la incorporación de repartidores y conductores de plataformas digitales a la seguridad social.

Los números, sin embargo, muestran que el modelo continúa en construcción. Casi 9.9 millones de trabajadores fueron registrados ante el IMSS durante el primer semestre del año con protección ante riesgos de trabajo, pero poco más de un millón accedió a todos los seguros establecidos por la Ley del Seguro Social.

La diferencia es enorme y abre una discusión que irá creciendo: cómo garantizar derechos efectivos a quienes trabajan mediante aplicaciones sin destruir la flexibilidad que caracteriza ese modelo de empleo.

Para los sindicatos existe ahí una oportunidad estratégica. Se trata de millones de trabajadores que empiezan a adquirir derechos reconocidos, pero que todavía carecen de mecanismos sólidos de representación colectiva. La siguiente discusión laboral probablemente no será únicamente afiliarlos al Seguro Social, sino cómo defenderlos frente a algoritmos, desconexiones, cambios en tarifas y condiciones impuestas unilateralmente por las plataformas.

En salud, el gobierno presentó cifras de expansión. En el conjunto de IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar se reportaron 33 nuevos hospitales en operación, nuevas unidades médicas y 650 quirófanos modernizados. La meta del sexenio contempla además 152 nuevas unidades y nueve mil camas adicionales.

La expansión representa una señal positiva, pero el desafío ya no está solamente en construir hospitales. Está en garantizar que funcionen con médicos, enfermeras, medicamentos, equipos y mecanismos adecuados de supervisión.

Ese último punto quedó bajo presión en Guerrero.

Familiares de pacientes con insuficiencia renal denunciaron deficiencias en un servicio de hemodiálisis subrogado por el IMSS. De acuerdo con un reporte

periodístico, la empresa adjudicataria habría contratado a otra compañía para prestar directamente las terapias.

Los familiares señalan falta de atención adecuada y problemas para obtener respuestas sobre aspectos esenciales del tratamiento. Hasta ahora se trata de denuncias que requieren investigación institucional, pero el asunto es particularmente delicado porque la hemodiálisis no admite improvisación: para un paciente renal, una sesión no es un servicio administrativo; es parte de su supervivencia.

El caso sintetiza uno de los grandes retos del sistema público de salud. México puede construir más hospitales y aumentar presupuesto, pero la confianza del derechohabiente se decide en otro lugar: en la consulta, en la farmacia, en la cirugía y en cada sesión de tratamiento.

Ese será el verdadero examen para el IMSS y para el gobierno federal durante los próximos meses.

La política ya está pensando en 2027. Los sindicatos están entrando a nuevos territorios de representación. Y el IMSS intenta ampliar su capacidad mientras debe garantizar que cada peso invertido se traduzca en atención efectiva.

En las tres agendas aparece el mismo desafío: crecer es importante; demostrar resultados concretos será decisivo.